

ECUADOR EN LOS ALBORES DEL EXTRACTIVISMO MINERO: UN ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL DEL PRIMER PROYECTO DE MINERÍA A GRAN ESCALA EN EL PAÍS

Mario Andrés Ávila M. Sc.

mavila@uea.edu.ec

Universidad Estatal Amazónica – Sede Zamora Chinchipe

Línea temática: “Ecología política y conflictos socioambientales en perspectiva histórica”

RESUMEN

Ecuador, desde el año 1972, ha basado su economía en la renta de recursos naturales no renovables, específicamente con la explotación del petróleo. A partir de 2012, se firma el primer contrato de explotación minera a gran escala, con lo cual, el país consolida su modelo primario exportador con esta nueva rama extractiva. Desde entonces, el proyecto de cobre “Mirador”, concesionado a la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), se ha convertido en el único proyecto de minería industrial en etapa de explotación del Estado. Este proyecto se asienta en el sur de la amazonia ecuatoriana, específicamente en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Desde los inicios de la exploración del proyecto –en 1994-, se han generado varios focos de conflictos socioambientales en sus áreas de influencia, lo que despertó el interés por documentar y analizar los conflictos desde una perspectiva histórica, que permitan establecer una línea base alrededor del mismo, y sobre eso, se pueda establecer futuros estudios o comparaciones.

En la última década, se ha evidenciado un avance significativo de proyectos extractivos en Latinoamérica, probablemente debido a los elevados precios de los *commodities* en el mercado mundial. Esto ha llamado la atención de los países poseedores de recursos naturales no renovables, quienes, en su afán de obtener mayores ingresos fiscales, han otorgado concesiones de proyectos petroleros o mineros que han generado conflictividad social. Según Svampa, el neo-extractivismo “destruye biodiversidad y profundiza el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar comunidades rurales, campesinas o indígenas”. De lo observado para el caso ecuatoriano, los conflictos asociados a proyectos extractivos se los analiza a dos escalas: la local y la nacional. En

cuanto a los conflictos surgidos a nivel local, – aquí relacionados con los conflictos ecológicos distributivos- se los liga con protestas de las poblaciones aledañas a los proyectos extractivos que buscan que sus medios de producción y supervivencia no se vean afectados por dichas actividades. Por su parte, los conflictos a nivel nacional están relacionados con los criterios de sostenibilidad débil o sostenibilidad fuerte, concepto teórico planteado por Martínez y Roca, y adoptado también por Bebbington.

La metodología utilizada se basó en revisar información secundaria, la aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas como encuestas, entrevistas semi-estructuradas y a profundidad con actores clave, talleres con organizaciones y, adicionalmente, la observación directa. Los resultados dejan varias ideas de interés, por ejemplo, la fragmentación social de organizaciones y comunidades, e incluso, fragmentación intrafamiliar por posturas favorables o contrarias a la minería industrial. Se encontró también que las estrategias utilizadas por parte de la empresa concesionaria fueron efectivas para consolidar el proyecto en la zona, y debilitar la oposición social que, hasta ese momento, lucía sólida. La idea de legitimar la minería también fue apoyada por el gobierno de turno, a través de proyectos de infraestructura, discursos públicos, entre otras estrategias. Los efectos ambientales no fueron mayoritariamente visibles, sino hasta la etapa de construcción de infraestructura de mina, impactando en las fuentes hídricas y, sobre todo, el paisaje de la zona.